

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

PRIMERA PARTE

31ª REUNION — 9ª SESION ORDINARIA —
SEPTIEMBRE 13 Y 14 DE 1995

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Carlos Alberto Romero y Horacio Daniel Usandizaga

Secretarios: doctores Esther H. Percyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABASTO, Angel Leónidas
ADAIME, Felipe Teófilo
ALBAMONTE, Alberto
ALBERTI, Juan Carlos
ALCALA, Néstor Ricardo
ALGABA, Ernesto Pedro
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ ECHAGUE, Raúl
ALVAREZ GARCÍA, Normando M.
ANTELO, José María
ARAGONES de JUAREZ, Mercedes
ARANDA, Saturnino Dantti
ARGUELLO, Jorge Martín Arturo
ARIAS, César
ARMENDARIZ, Alejandro
AYALA, Susana Beatriz
AYETZ, Liliana
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BALTER, Carlos Mario
BARRIONUEVO, Eduardo E.
BAUM, Daniel
BECERRA, Carlos Armando
BENEDETTI, Jorge Enrique
BENZI, María Cristina
BERHONGARAY, Antonio Tomás
BERMUDEZ, María del Pilar
BIANCHI SILVESTRE, Marcela
BISCHOF, Enrique Alberto
BONOMI, Silvia Mónica
BORDA, Osvaldo
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRAVO, Alfredo Pedro
BRESEK, Adalberto Edgardo
BRUZZO, Omar Abdullo
BULLRICH, Patricia
BUSSI, Antonio Domingo
CABIRON, Juan Carlos
CAMANO, Eduardo Oscar
CAMARA, Mario Angel
CARCA, Elisa Beatriz
CASARI de ALARCIA, Leonor

CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Anibal
CASTRO, Carlos José
CEBALLOS, Walter Alberto
CLOSS, Ramón Alberto
CROSTELLI, Juan Carlos
D'ALESSANDRO, Miguel
D'AMBIROSO, Angel Mario
DAUD, Jorge Carlos
D'ELIA, Roberto Antonio
DEL FABRO, Lilian
DELLEPIANE, Carlos Francisco
DIAZ MARTINEZ, Jorge Raúl
DIGON, Roberto Secundino
DI TULIO, Héctor Horacio
DONNI, Luisa Cristina
DRISALDI, María Rita
DURRIEU, Marcela Margarita
ESTEVEZ BOERO, Guillermo E.
FABRISSIN, Carlos Alberto
FALLETTI, Julio César José
FAYAD, Victor Manuel
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FERNANDEZ GILL, Guillermo
FERNANDEZ MELJIDE, Graciela
FLORES, Rafael Horacio
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Delcio
GALANTE, Pedro Jorge
GALVAN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA MORENO, Miguel Angel
GAZIA, Rodolfo Mauricio
GIMÉNEZ, Défor Abel
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GIOJA, José Luis
GOLPE, Carlos Horacio
GOLPE, Néstor Lino
GONZÁLEZ, Antonio Erman
GONZÁLEZ CABAÑAS, Tomás W.
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.
GRANADOS, Dulce
GREEN, Gustavo Adolfo
GUERRERO, Luis Serafin
HARDY, Anibal Osvaldo
HERNÁNDEZ, Antonio María

HERRERA, Bernardo Eligio
HUMADA, Raúl
IBARRIA, José María
ITURRE, César Eusebio
JAUNARENA, José Horacio
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAHLER, Ernesto Rolando
KELLY, Elsa Diana Rosa
KOTH, Carlos
LAHOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
LOSADA, Luis Enrique
LUNA, Hernán Daniel (1)
LLOPIS, Enrique Raúl
MACEDO, Horacio Antonio
MAIDANA, Elsa Ignacia
MARCOS, Ricardo Ernesto
MARTÍNEZ, Manuel Luis
MARTÍNEZ, Silvia Virginia
MARTÍNEZ GARBINO, Emilio R.
MATHOV, Enrique José
MATZKIN, Jorge Rubén
MEENDOZA, Claudio Ramiro
MEENDOZA, Martín
MENEGHINI, Javier Reynaldo
MENEM, Carlos Omar
MERCADER, Martha Evelina
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
MICHITTE, Salomón Antonio
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRALLES de ROMERO, Norma
MOLINAS, Ricardo Francisco
MONTIEL, Sergio Alberto
MOREAU, Leopoldo Raúl
MORELLO, Emilio Pedro
MULLER, Mabel Hilda
MUNTAGURRIA, Marcelo Julio
MURIEL, Néstor Jorge
NACUL, Miguel Caniel
NATALE, Alberto Adolfo
NEGRI, Mario Raúl

NIEVA, Alejandro Mario
 NISO, Jorge
 NOYAU, Pedro José
 OLIVERA, Enrique José
 ORGAZ, Carlos Alfredo
 ORQUIN, Leopoldo Manuel
 ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
 PARADA, Alberto
 PAROLA, José María
 PASQUAL, Rafael Manuel
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERALTA, Anibal Pedro
 PEREZ, Jorge Telmo
 PERINASETTI, Horacio F.
 PERRINI, Giacomina Eulalia
 PICCININI, Ana Ida
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PINTO, Guillermo
 POLINO, Héctor Teodoro
 POZO, Luis Nicolás
 PRAT, Alfredo Ernesto
 RE, Ricardo Horacio
 RICO, Aldo
 RODRIGUEZ, Jesús
 RODRIGUEZ, Eitel E.
 RODRIGUEZ SANUDO, Hugo R.
 ROGGERO, Humberto Jesús
 ROJO, Rubén Darío
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Humberto Antonio
 RUBINI, Mirta Elsa
 RUBIN PALACIOS, José David
 SALINO, María Antonia
 SAMPIETRO, Dorel
 SANTIN, Eduardo
 SCHLIZ, Carlos José
 SERASTIANI, Claudio A.
 SMITH, Santos
 SOLANAS, Fernando E.
 SONIA, Carlos Ernesto
 SPINOSA, Augusto Juan
 STORANI, Federico
 SUCHARIA, Nefel

SUEIRO, Carlos Adolfo
 TENEV, Carlos
 TEODOSIU, Jorge Nicolás
 TERRAGNO, Rodolfo Héctor
 TOMA, Miguel Ángel
 TOPA, Raúl Roque
 TOTO, Francisco Patricio
 TRETTEL MEYER, Raúl
 USANDIZAGA, Horacio Daniel
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VARELA, Néstor Angel
 VAZQUEZ, Silvia Beatriz
 VENESIA, Gualberto Edgardo
 VICCHI, Raúl Horacio
 VIGLIONE, Atilio Oscar
 VITAR, José Alberto
 ZAVALA, José Luis
 ZICARELLI, Orlando A.
 ZUCCARDI, María Cristina

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

MAQUEDA, Juan Carlos
 MOLARDO, Elvio Francisco
 ROY, Irma
 SOBRINO, Margarita María
 TOGNI de VELY, Adriana

AUSENTES, CON LICENCIA:

ABRIAGGLE, Carlos Enrique
 ARRECHEA, José Salvador
 BECERRA, Nicolás Eduardo
 CERDERA, Rogelio Rafael
 GAUNA, Juan Octavo
 GÓMEZ CENTURION, Carlos E.
 MUÑOZ, Marcelo Bernardo
 NEFFER, Jorge Humberto
 PELAEZ, Víctor
 ROIG, Ángel
 SANCHEZ GALDEANO, Roque
 SCHIARETTI, Juan

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:

ACHEM, Antonio
 BARBERA, Eliseo
 CALLABA, Anibal
 DUMÓN, José Gabriel
 HERRERA ARIAS, Manuel H.
 KAMMERATH, Gerónimo Luis
 KESSLER, Ana Raquel
 LAFALLA, Arturo Pedro
 PESCE, Félix
 SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTES, CON AVISO:

ACEROLAZA, Florencio
 ALENDE, Oscar Eduardo
 BARBOTTI, Atilio Ector
 BONINO, Miguel Angel
 BRANDA, Carlos Ernesto
 BRUNELLI, Naldo Raúl A.
 CAMPERO, Rodolfo Martín
 CORCHUELO BLASCO, José M.
 FIGUEROA, Pedro Octavio
 FOLLONI, Jorge Oscar
 GUZMÁN, María Cristina
 HARRECHE, Julio César
 LYNCH, Carlos Alberto
 MACHADO, Oscar Alfredo
 MANFREDOTTI, Carlos
 MARCOLO, Juan Miguel A.
 MARTINEZ, Esteban
 MICHELLI, Marco Aurelio
 PARMON, José María
 PATTERSON, Ricardo Ancell
 RODRIGO, Esteban Joaquín
 RODRIGUEZ, José
 SARQUIZ, José Alberto
 TOLOMO, Leonor
 TROYANO, Silvia Elena
 VARELA CID, Eduardo
 VAZQUEZ, Roberto

(1) Incorporado en la presente sesión en reemplazo del ex señor diputado Francisco de Darañona y Vedla (falleció el 26/3/35).

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 1.ª Sesión Ordinaria (Anexo 4.ª reunión), de fecha 8 y 9 de marzo de 1935.

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 3740.)
2. Lectura de la resolución de la Presidencia de la Honorable Cámara de adhesión al duelo por el fallecimiento del señor diputado Francisco de Darañona y Vedla. (Pág. 3740.)
3. Juramento o incorporación del señor diputado electo por el distrito electoral de Buenos Aires, don Hernán Daniel Luca. (Pág. 3740.)
4. Asuntos entrados: reducción respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento inmediato del cuerpo. (Pág. 3742.)
5. Licencias para faltar a las sesiones de la Honorable Cámara. (Pág. 3742.)
6. Diferimiento del témino reglamentario destinado a rendir homenajes. (Pág. 3743.)
7. Plan de labor de la Honorable Cámara. (Pág. 3743.)

8. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de tratamiento sobre tablas. (Pág. 3746.)

I. Moción del señor diputado Moreau de preferencia para el proyecto de ley del señor diputado Galván y otros sobre creación de una comisión bicameral investigadora de actos violatorios de los intereses del Estado (3.669-D-95). Es rechazada. (Pág. 3747.)

II. Moción del señor diputado López Arias de que se trate sobre tablas el dictamen de la Comisión de Peticiones, Puntos y Reglamento sobre modificación del Reglamento de la Honorable Cámara (3.656-D-95), y moción del señor diputado Neri de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 9 de este orden. Es retirada la primera y se aprueba la segunda. (Pág. 3752.)

9. Consideración de un proyecto de resolución acordado por la Honorable Cámara por el cual se

beneficé por el 50º aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. (Pág. 4011.)

CXXVII. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en los proyectos de declaración de los señores diputados Argüello (2.590-D.-95) y Valcarcel (2.759-D.-95) por los que se repudian los actos de violencia ocurridos en la República de Colombia. (Pág. 4042.)

CXXVIII. Dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de resolución de la señora diputada Guzmán por el que se declara de interés legislativo el XIII Campeonato Argentino de Básquet de la categoría cadete en la ciudad de San Salvador de Jujuy (3.234-D.-94). (Página 4043.)

CXXIX. Dictamen de las comisiones de Deportes, de Drogadicción y de Acción Social y Salud Pública en los proyectos de ley de los señores diputados Benedetti (5.271-D.-94) y Alvarez (C. R.) (5.431-D.-94) sobre régimen de prevención y control antidopíng en el deporte (Página 4043.)

CXXX. Pronunciamento de la Honorable Cámara sobre los asuntos a los que se refieren los números 11.I a 11.CXXIX de este sumario. Se sancionan. (Pág. 4045.)

13. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda en las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre riesgos del trabajo (59-P.E.-94). Se sanciona definitivamente (ley 24.557). (Pág. 4045.)

14. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Fernández Meijide con motivo de expresiones vertidas por el señor diputado Alsogaray (3.972-D.-95). Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 4059.)

15. Moción de orden formulada por el señor diputado Solanas para que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración de su autonomía por el cual se repudian procedimientos judiciales que agravan la libertad de prensa (3.942-D.-95). Se aprueba. (Pág. 4061.)

16. Moción del señor diputado Solanas para que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 15 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 4062.)

17. Consideración del dictamen de las comisiones de Deportes, de Drogadicción y de Acción Social y Salud Pública en el proyecto de ley de los señores diputados Benedetti (5.271-D.-94) y Alvarez (C.

R.) (5.431-D.-94) sobre régimen de prevención y control antidopíng en el deporte. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 4061.)

18. Consideración del dictamen de las comisiones de Minería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el proyecto de ley en revisión sobre modificación del artículo 282 del Código de Minería e incorporación de un título complementario sobre protección ambiental para la actividad minera (152-D.-94). Se sanciona. (Página 4079.)

19. Moción de orden formulada por el señor diputado Montiel para que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución del que es coautor por el que se dispone la suspensión preventiva del señor diputado Varela Cid (3.931-D.-95). Es rechazada. (Pág. 4084.)

20. Moción de orden formulada por el señor diputado Soria para que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, y moción de que se trate sobre tablas la comunicación del señor diputado Varela Cid por la que renuncia a sus fueros parlamentarios para presentarse ante la Justicia (3.858-D.-95). No se vota por falta de quórum. (Pág. 4088.)

21. Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 4103.)

B. Asuntos entrados:

I. Mensajes del Poder Ejecutivo. (Pág. 4181.)

II. Comunicaciones del Honorable Senado. (Pág. 4181.)

III. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 4182.)

IV. Dictámenes de comisiones. (Pág. 4182.)

V. Dictámenes observados. (Pág. 4196.)

VI. Comunicaciones de comisiones. (Página 4196.)

VII. Comunicaciones de señores diputados. (Página 4196.)

VIII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 4197.)

IX. Peticiones particulares. (Pág. 4204.)

X. Proyectos de ley. (Pág. 4206.)

XI. Proyectos de resolución. (Pág. 4211.)

XII. Proyectos de declaración. (Pág. 4221.)

XIII. Licencias. (Pág. 4222.)

C. Inserción solicitada por el señor diputado Di Tulio. (Pág. 4232.)

D. Asistencia de los señores diputados a las reuniones de comisiones (mes de agosto de 1995). (Página 4260.)

estilos particulares y tecnologías difusionistas, en una articulación que si bien arrojaba pérdida cultural también daba fuertes obras que pertenecían a lo que cada época era capaz de reflexionar o inventar.

El seminario en cuestión tiene como objetivo fundamental promover el más amplio debate acerca de la interrelación entre el espacio audiovisual, la democracia y la cultura, haciendo hincapié en los procesos de desregulación y de gran concentración que se han producido o están produciéndose actualmente en este campo y las serias consecuencias y riesgos que ello implica para las democracias y culturas latinoamericanas.

Fernando E. Solanas.

CXXX

PRONUNCIAMIENTO

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar si se aprueban los dictámenes cuya consideración conjunta acaba de disponer la Honorable Cámara.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Quedan sancionados los proyectos de ley, de resolución o de declaración¹.

Se harán las comunicaciones pertinentes.

Se van a votar las inserciones solicitadas por el señor diputado Di Tulio y por la señora diputada Kelly.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Quedan autorizadas las inserciones peticionadas².

13

RIESGOS DEL TRABAJO

(Orden del Día Nº 1.773)

Dictamen de las comisiones³

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda han considerado las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, sobre la regulación de la prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo; y,

por razones expuestas en el informe que se acompaña, y las que dará el miembro informante, aconsejan su aceptación.

Sala de las comisiones, 30 de agosto de 1995.

Francisco de Durañona y Vedia. — Oscar S. Lamberto. — Delfor A. Giménez. — Osvaldo A. Bracchi. — Carlos J. Scelzi. — Horacio P. Pernasetti. — Carlos De Nepiano. — César Arias. — Alberto E. Balestrini. — Miguel A. Balestrini. — Carlos E. Branda. — Naldo R. A. Brunelli. — Eduardo O. Camaño. — José L. Castillo. — Roberto Digón. — Miguel H. D'Alessandro. — Rodolfo M. Gazia. — José L. Gioja. — Tomás W. González Cabañas. — Germán L. Kammerath. — Ana R. Kessler. — Marcelo E. López Arias. — Horacio A. Macedo. — Juan C. Maqueda. — Salomón A. Michette. — Marcelo J. Munizagurria. — Mario R. Negrí. — Pedro J. Novau. — Lorenzo A. Pepe. — Humberto J. Roggero. — María A. Salino. — Claudio A. Sebastiani. — Carlos E. Soria. — Carlos A. Suciro.

En disidencia:

Leopoldo M. Orquín.

Buenos Aires, 17 de agosto de 1995.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre accidentes de trabajo, y ha tenido a bien aprobarlo, con el voto de los dos tercios de los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional), con las siguientes modificaciones:

En el artículo 4º, sustituir el primer párrafo del inciso 2º por el siguiente:

2. Los contratos entre la ART y los empleadores incorporarán un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que indicará las medidas y modificaciones que los empleadores deban adoptar en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente fijándose en veinticuatro (24) meses el plazo máximo para su ejecución.

En el artículo 36, incorporar como inciso gº el siguiente:

g) Supervisar y fiscalizar a las empresas autoaseguradas y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo en ellas.

En el artículo 40, punto 3, tercer párrafo, reemplazar la denominación "Presidente de la Nación" por "Pre-

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 4108.)

² Véase el texto de las inserciones en el Apéndice. La inserción solicitada por la señora diputada Kelly no figura por no haber sido remitida para su publicación.

³ Artículo 90 del reglamento.

Presidente del Comité Consultivo Permanente de la LRT previsto en el inciso 1°.

En el artículo 46, sustituir el inciso 1 por el siguiente:

1. Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal con competencia en cada provincia ante el cual en su caso se formularán la correspondiente expresión de agravios o ante la Comisión Médica Central a opción de cada trabajador.

La Comisión Médica Central sustanciará los recursos por el procedimiento que establezca la reglamentación.

Las resoluciones que dicte el juez federal con competencia en cada provincia y las que dicte la Comisión Médica Central serán recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Todas las medidas de prueba, producidas en cualquier instancia, tramitarán en la jurisdicción y competencia donde tenga domicilio el trabajador y serán gratuitas para éste.

Incorporar, como artículo 50, uno nuevo con el siguiente texto:

Artículo 50: Sustitúyese el artículo 51 de la ley 24.241 por el siguiente:

Artículo 51: Las comisiones médicas y la Comisión Médica Central estarán integradas por cinco (5) médicos que serán designados: tres (3) por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y dos (2) por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los que serán seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes. Contarán con la colaboración de personal profesional, técnico y administrativo.

Los gastos que demande el funcionamiento de las comisiones serán financiados por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en el porcentaje que fije la reglamentación.

Como mínimo funcionará una comisión médica en cada provincia y otra en la ciudad de Buenos Aires.

Adecuar la numeración del artículo 50, renumerándolo como artículo 51.

Saludo a usted muy atentamente.

CARLOS F. RUCKAUF
Edgardo R. Pluzzi,

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda han tomado en consideración las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que lo fuera pasado en revisión por el que se legisla la regulación de la prevención de los riesgos y la reparación de los

daños derivados del trabajo; no encontrando objeciones, por lo que aconsejan al honorable cuerpo la aceptación de las mismas.

Francisco de Durazón y Vedía,

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 21 de junio de 1995.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,...

CAPÍTULO I

Objetivos y ámbito de aplicación de la ley

Artículo 1º — Normativa aplicable y objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT).

1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta LRT y sus normas reglamentarias.

2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT):

- a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;
- b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado;
- c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados;
- d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

Art. 2º — Ámbito de aplicación

1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT:

- a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
- b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado;
- c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.

2. El Poder Ejecutivo nacional podrá incluir en el ámbito de la LRT a:

- a) Los trabajadores domésticos;
- b) Los trabajadores autónomos;
- c) Los trabajadores vinculados por relaciones laborales; y
- d) Los bomberos voluntarios.

Art. 3º — Seguro obligatorio y autoseguro.

1. Esta LRT rige para todos aquellos que contraten trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.
2. Los empleadores podrán autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en esta ley, siempre y cuando acrediten con la periodicidad que fije la reglamentación:

- a) Solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones de esta ley; y
- b) Garantíen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica y las demás previstas en el artículo 20 de la presente ley.

3. Quienes no acrediten ambos extremos deberán asegurarse obligatoriamente en una "Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)" de su libre elección.

4. El Estado nacional, las provincias y sus municipios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrán igualmente autoasegurarse.

CAPÍTULO II**De la prevención de los riesgos del trabajo****Art. 4º — Obligaciones de las partes.**

1. Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.

A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente, dichas partes deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Estos compromisos podrán adoptarse en forma unilateral, formar parte de la negociación colectiva, o incluirse dentro del contrato entre la ART y el empleador.

2. Los contratos entre la ART y los empleadores incorporarán un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que indicará las medidas y modificaciones que el empleador deba adoptar en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente, y fijará los plazos para su ejecución.

El Poder Ejecutivo nacional regulará las pautas y contenidos del plan de mejoramiento, así como el régimen de sanciones.

3. Mientras el empleador se encuentre ejecutando el plan de mejoramiento no podrá ser sancionado por incumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

4. La ART controlará la ejecución del plan de mejoramiento, y está obligada a denunciar los incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

5. Las discrepancias acerca de la ejecución del plan de mejoramiento serán resueltas por la SRT.

Art. 5º — Recargo por incumplimientos.

1. Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se hubiere producido como consecuencia de incumplimientos por parte del empleador de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, éste deberá pagar al Fondo de Garantía, instituido por el artículo 33 de la presente ley, una suma de dinero cuya cuantía se graduará en función de la gravedad del incumplimiento y cuyo tope máximo será de treinta mil pesos (\$ 30.000).

2. La SRT es el órgano encargado de constatar y determinar la gravedad de los incumplimientos, fijar el monto del recargo y gestionar el pago de la cantidad resultante.

CAPÍTULO III**Contingencias y situaciones cubiertas****Art. 6º — Contingencias.**

1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho de en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.

2. Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo nacional, conforme al procedimiento del artículo 40 apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos y actividades, en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional.

Las enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias en ningún caso serán consideradas resarcibles.

3. Están excluidos de esta ley:

- a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo;
- b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación.

Art. 7º — Incapacidad laboral temporaria.

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales.

2. La situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cesa por:

- a) Alta médica;
- b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP);
- c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante;
- d) Muerte del damnificado.

Art. 8º — Incapacidad Laboral Permanente.

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa.

2. La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al 60 %, y parcial, cuando fuere inferior a este porcentaje.

3. El grado de incapacidad laboral permanente será determinado por las comisiones médicas de esta ley, en

base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo y, ponderará entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral.

4. El Poder Ejecutivo garantizará, en los supuestos que correspondiese, la aplicación de criterios homogéneos en la evolución de las incapacidades dentro del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y de la LRT.

Art. 9º. — *Carácter provisorio y definitivo de la ILP.*

1. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al damnificado a percibir una prestación de pago mensual, tendrá carácter provisorio durante los 36 meses siguientes a su declaración.

Este plazo podrá ser extendido por las comisiones médicas, por un máximo de 24 meses más, cuando no exista certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.

En los casos de Incapacidad Laboral Permanente parcial el plazo de provisionalidad podrá ser reducido si existiera certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.

Vencidos los plazos anteriores, la Incapacidad Laboral Permanente tendrá carácter definitivo.

2. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese derecho al damnificado a percibir una suma de pago único tendrá carácter definitivo a la fecha del cese del período de incapacidad temporaria.

Art. 10. — *Gran invalidez.*

Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de Incapacidad Laboral Permanente total necesite la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida.

CAPÍTULO IV

Prestaciones dinerarias

Art. 11. — *Régimen legal de las prestaciones dinerarias.*

1. Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas.

2. Las prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) o permanente provisorio se ajustarán en función de la variación del AMPO definido en la ley 24.241, de acuerdo a la norma reglamentaria.

3. El Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en la presente ley cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan.

Art. 12. — *Ingreso base.*

1. — A los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se considera ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a cotización correspondientes a los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante o al tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un año, por el número de días corridos comprendidos en el período considerado.

2. El valor mensual del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obtenida según el apartado anterior por 30,4.

Art. 13. — *Prestaciones por Incapacidad Laboral Temporaria.*

1. A partir de la primera manifestación invalidante y mientras dure el período de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía igual al valor mensual de ingreso base.

La prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días estará a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo de la ART la que, en todo caso, asumirá las prestaciones en especie.

El pago de la prestación dineraria deberá efectuarse en el plazo y en la forma establecida en la ley 20.744 (texto ordenado 1976) para el pago de las remuneraciones a los trabajadores.

2. El responsable del pago de la prestación dineraria retendrá los aportes y efectuará las contribuciones correspondientes al sistema de seguridad social, abonando asimismo las asignaciones familiares.

3. Durante el período de Incapacidad Laboral Temporaria, originada en accidentes de trabajo o en enfermedades profesionales, el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 del presente artículo.

Art. 14. — *Prestaciones por Incapacidad Permanente Parcial (IPP).*

1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al 70 % del valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones familiares correspondientes.

2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá las siguientes prestaciones:

a) Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 20 %, una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante.

Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar \$ 55.000 por el porcentaje de incapacidad.

b) Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 20 % e inferior al 66 %, una Renta Periódica —contratada en los términos de esta ley—, cuya cuantía será igual al 70 % del valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Esta prestación está sujeta a las retenciones por aportes previsionales y del sistema nacional del seguro de salud.

Art. 15. — Prestaciones por Incapacidad Permanente Total (IPT).

1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual equivalente al 70 % del valor mensual del ingreso base. Percibirá, además, las asignaciones familiares correspondientes.

Durante este período, el damnificado no tendrá derecho a las prestaciones del sistema previsional.

2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado recibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen previsional al que estuviere afiliado.

El damnificado percibirá, asimismo, en las condiciones que establezca la reglamentación, una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen previsional. Su monto se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la ART. Este capital equivaldrá a 43 veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante y no podrá ser superior a los \$ 55.000.

3. Cuando la Incapacidad Permanente Total no deviniere en definitiva, la ART se hará cargo del capital de recomposición correspondiente, definido en la ley 24.241 (artículo 94) o, en su caso, abonará una suma equivalente al régimen previsional a que estuviese afiliado el damnificado.

Art. 16. — Retorno al trabajo por parte del damnificado.

1. La percepción de prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Permanente es compatible con el desempeño de actividades remuneradas.

2. El Poder Ejecutivo podrá reducir los aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social, correspondientes a supuestos de retorno al trabajo de trabajadores con Incapacidad Laboral Permanente.

Art. 17. — Gran invalidez.

1. El damnificado declarado gran inválido percibirá las prestaciones correspondientes a los distintos supuestos de Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT).

2. Adicionalmente, la ART abonará al damnificado una prestación de pago mensual equivalente a tres veces el valor del AMPO definido por la ley 24.241 (artículo 21), que se extinguirá a la muerte del damnificado.

Art. 18. — Muerte del damnificado.

1. Los derechohabientes accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y a la prestación de pago mensual complementaria prevista en el artículo 15 apartado 2.

2. Se consideran derechohabientes a los efectos de esta ley a las personas enumeradas en el artículo 53 de la ley 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas.

Art. 19. — Contratación de la renta periódica.

1. A los efectos de esta ley se considera renta periódica la prestación dineraria, de pago mensual, contratada entre el beneficiario y una ART o una compañía de

seguros de retiro, quienes a partir de la celebración del contrato respectivo, serán las únicas responsables de su pago. El derecho a la renta periódica comienza en la fecha de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad permanente parcial y se extingue con la muerte del beneficiario o en la fecha en que se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa.

En el caso de empresas que no se afilien a una ART, dicha prestación deberá ser contratada con una entidad de seguro de retiro a elección del beneficiario. Esta, a partir de la celebración del contrato respectivo, será la única responsable de su pago.

2. El Poder Ejecutivo fijará la forma y la cuantía de la garantía del pago de la renta periódica en caso de quiebra o liquidación por insolvencia de las compañías de seguros de retiro.

CAPÍTULO V

Prestaciones en especie

Artículo 20. —

1. Las ART otorgarán a los trabajadores que sufran algunas de las contingencias previstas en esta ley las siguientes prestaciones en especie:

- a) Asistencia médica y farmacéutica;
- b) Prótesis y ortopedia;
- c) Rehabilitación;
- d) Recalificación profesional; y
- e) Servicio funerario.

2. Las ART podrán suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativa injustificada del damnificado, determinada por las comisiones médicas, a percibir las prestaciones en especie de los incisos a), c) y d).

3. Las prestaciones a que se hace referencia en el apartado 1, incisos a), b) y c) del presente artículo, se otorgarán a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes, de acuerdo a como lo determine la reglamentación.

CAPÍTULO VI

Determinación y revisión de las incapacidades

Art. 21. — Comisiones médicas.

1. — Las comisiones médicas y la Comisión Médica Central creadas por la ley 24.241 (artículo 51), serán las encargadas de determinar:

- a) La naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad;
- b) El carácter y grado de la incapacidad;
- c) El contenido y alcance de las prestaciones en especie.

2. Estas comisiones podrán, asimismo, revisar el tipo, carácter y grado de la incapacidad, y —en las materias de su competencia— resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre el ART y el damnificado o sus derechohabientes.

3. La reglamentación establecerá los procedimientos a observar por y ante las comisiones médicas, así como el régimen arancelario de las mismas.

4. En todos los casos el procedimiento será gratuito para el damnificado, incluyendo traslados y estudios complementarios.

Art. 22. — *Revisión de la incapacidad.*

Hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad y a solicitud del obligado al pago de las prestaciones o del damnificado, las comisiones médicas efectuarán nuevos exámenes para revisar el carácter y grado de incapacidad anteriormente reconocidos.

CAPÍTULO VII

Régimen financiero

Art. 23. — *Cotización.*

1. Las prestaciones previstas en esta ley a cargo de las ART, se financiarán con una cuota mensual a cargo del empleador.

2. Para la determinación de la base imponible se aplicarán las reglas de la ley 24.241 (artículo 9, incluyéndose todas las prestaciones que tengan carácter remuneratorio a los fines del SJP).

3. La cuota debe ser declarada y abonada juntamente con los aportes y contribuciones que integran la CUSS. Su fiscalización, verificación y ejecución estará a cargo de la ART.

Art. 24. — *Régimen de alienotas.*

1. La Superintendencia de Seguros de la Nación en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo establecerán los indicadores que las ART labrán de tener en cuenta para diseñar el régimen de alienotas. Estos indicadores reflejarán la siniestralidad presunta, la siniestralidad efectiva, y la permanencia del empleador en una misma ART.

2. Cada ART deberá fijar su régimen de alienotas en función del cual será determinable, para cualquier establecimiento, el valor de la cuota mensual.

3. El régimen de alienotas deberá ser aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

4. Dentro del régimen de alienotas, la cuota del artículo anterior será fijada por establecimiento.

Art. 25. — *Tratamiento impositivo.*

1. Las cuotas del artículo 23 constituyen gasto deducible a los efectos del impuesto a las ganancias.

2. Los contratos de afiliación a una ART están exentos de todo impuesto o tributo nacional.

3. El contrato de renta periódica goza de las mismas exenciones impositivas que el contrato de renta vitalicia provisional.

4. Invítase a las provincias a adoptar idénticas exenciones que las previstas en el apartado anterior.

5. Las reservas obligatorias de las ART están exentas de impuestos.

CAPÍTULO VIII

Gestión de las prestaciones

Art. 26. — *Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.*

1. Con la salvedad de los supuestos del régimen del autoseguro, la gestión de las prestaciones y demás ac-

ciones previstas en la LRT estará a cargo de entidades de derecho privado, previamente autorizadas por la SRT, y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, denominadas "Aseguradoras de Riesgos del Trabajo" (ART), que reúnan los requisitos de solvencia financiera, capacidad de gestión, y demás recaudos previstos en esta ley, en la ley 20.091, y en sus reglamentos.

2. La autorización conferida a una ART será revocada:

- a) Por las causas y procedimientos previstos en esta ley, en la ley 20.091, y en sus respectivos reglamentos;
- b) Por omisión de otorgamiento íntegro y oportuno de las prestaciones de esta LRT;
- c) Cuando se verifiquen deficiencias graves en el cumplimiento de su objeto, que no sean subsanadas en los plazos que establezca la reglamentación.

3. Las ART tendrán como único objeto el otorgamiento de las prestaciones que establece esta ley, en el ámbito que —de conformidad con la reglamentación— ellas mismas determinen.

4. Las ART podrán, además, contratar con sus afiliados:

- a) El otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la legislación laboral para los casos de accidentes y enfermedades inculpables; y,
- b) La cobertura de las exigencias financieras derivadas de los juicios por accidentes y enfermedades de trabajo con fundamento en leyes anteriores.

Para estas dos operatorias la ART fijará libremente la prima, y llevará una gestión económica y financiera separada de la que corresponda al funcionamiento de la LRT.

Ambas operatorias estarán sometidas a la normativa general en materia de seguros.

5. El capital mínimo necesario para la constitución de una ART será de tres millones de pesos (\$ 3.000.000) que deberá integrarse al momento de la constitución. El Poder Ejecutivo podrá modificar el capital mínimo exigido, y establecer un mecanismo de movilidad del capital en función de los riesgos asumidos.

6. Los bienes destinados a respaldar las reservas de la ART no podrán ser afectados a obligaciones distintas a las derivadas de esta ley, ni aun en caso de liquidación de la entidad.

En este último caso, los bienes serán transferidos al Fondo de Reserva de la LRT.

7. Las ART deberán disponer, con carácter de servicio propio o contratado, de la infraestructura necesaria para proveer adecuadamente las prestaciones en especie previstas en esta ley. La contratación de estas prestaciones podrá realizarse con las obras sociales.

Art. 27. — *Afiliación.*

1. Los empleadores no incluidos en el régimen de autoseguro deberán afiliarse obligatoriamente a la ART que libremente elijan, y declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores.

2. La ART no podrá rechazar la afiliación de ningún empleador incluido en su ámbito de actuación.

3. La afiliación se celebrará en un contrato cuya forma, contenido y plazo de vigencia determinará la SRT.

4. La renovación del contrato será automática, aplicándose el Régimen de Aliquota vigente a la fecha de la renovación.

5. La rescisión del contrato de afiliación estará sujeta a la firma de un nuevo contrato por parte del empleador con otra ART o a su incorporación en el régimen de autoseguro.

Art. 28. — *Responsabilidad por omisiones.*

1. Si el empleador no incluido en el régimen de autoseguro omitiera afiliarse a una ART, responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley.

2. Si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones, y podrá repetir del empleador el costo de éstas.

3. En el caso de los apartados anteriores el empleador deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía de la LRT.

4. Si el empleador omitiera —total o parcialmente— el pago de las cuotas a su cargo, la ART otorgará las prestaciones, y podrá osecular contra el empleador las cotizaciones adeudadas.

Art. 29. — *Insuficiencia patrimonial.*

Declarada judicialmente la insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado, o en su caso autoasegurado, para asumir las obligaciones a su cargo, las prestaciones serán financiadas por la SRT con cargo al Fondo de Garantía de la LRT.

La insuficiencia patrimonial del empleador será probada a través del procedimiento sumarísimo previsto para las acciones meramente declarativas conforme se enenentre regulado en las distintas jurisdicciones donde la misma deba acreditarse.

Art. 30. — *Autoseguro.*

Quienes hubiesen optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que esta ley pone a cargo del empleador y a cargo de las ART, con la excepción de la afiliación, el aporte al Fondo de Reserva de la LRT y toda otra obligación incompatible con dicho régimen.

CAPÍTULO IX

Derechos, deberes y prohibiciones

Art. 31. — *Derechos, deberes y prohibiciones.*

1. Las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo:

- a) Denunciarán ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, incluido el plan de mejoramiento;
- b) Tendrán acceso a la información necesaria para cumplir con las prestaciones de la LRT;
- c) Promoverán la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acer-

ca de los planes y programas exigidos a las empresas;

- d) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimientos;
- e) Informarán a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances, de su régimen de aliequotas, y demás elementos que determine la reglamentación;
- f) No podrán fijar cuotas en violación a las normas de la LRT, ni destinar recursos a objetos distintos de los previstos por esta ley;
- g) No podrán realizar exámenes psicofísicos a los trabajadores, con carácter previo a la celebración de un contrato de afiliación,

2. Los empleadores:

- a) Recibirán información de la ART respecto del régimen de aliequotas y de las prestaciones, así como asesoramiento en materia de prevención de riesgos;
- b) Notificarán a los trabajadores acerca de la identidad de la ART a la que se encuentren afiliados;
- c) Denunciarán a la ART y a la SRT los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en sus establecimientos;
- d) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento;
- e) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento.

3. Los trabajadores:

- a) Recibirán de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgos del trabajo, debiendo participar en las acciones preventivas;
- b) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento, así como con las medidas de recalificación profesional;
- c) Informarán al empleador los hechos que conozcan relacionados con los riesgos del trabajo;
- d) Se someterán a los exámenes médicos y a los tratamientos de rehabilitación;
- e) Denunciarán ante el empleador los accidentes y enfermedades profesionales que sufran.

Art. 32. — *Sanciones.*

1. El incumplimiento por parte de los empleadores autoasegurados, de las ART y de las compañías de seguros de retiro de las obligaciones a su cargo, será sancionado con una multa de 20 a 2.000 AMPOs (Aporte Medio Previsional Obligatorio), si no resultare un delito más severamente penado.

2. El incumplimiento de los empleadores autoasegurados, de las ART y de las compañías de seguros de retiro, de las prestaciones establecidas en el artículo 20, apartado 1, inciso a) (asistencia médica y farmacéutica), será reprimido con la pena prevista en el artículo 106 del Código Penal.

3. Si el incumplimiento consistiera en la emisión de abonar las cuotas o de declarar su pago, el empleador será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años.

4. El incumplimiento del empleador autoasegurado, de las ART y de las compañías de seguros de retiro de las prestaciones dincrarías a su cargo, o de los apertes a los fondos creados por esta ley será sancionado con prisión de dos a seis años.

5. Cuando se trate de personas jurídicas la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible.

6. Los delitos tipificados en los apartados 3 y 4 del presente artículo se configurarán cuando el obligado no diese cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los quince días corridos de intimado a ello en su domicilio legal.

7. Será competente para entender en los delitos previstos en los apartados 3 y 4 del presente artículo la justicia federal.

CAPÍTULO X

Fondo de Garantía de la LRT

Art. 33. — Creación y recursos.

1. Créase el Fondo de Garantía de la LRT con cuyos recursos se abonarán las prestaciones en caso de insuficiencia patrimonial del empleador, judicialmente declarada.

2. Para que opere la garantía del apartado anterior, los beneficiarios o la ART en su caso, deberán realizar las gestiones indispensables para ejecutar la sentencia y solicitar la declaración de insuficiencia patrimonial en los plazos que fija la reglamentación.

3. El Fondo de Garantía de la LRT será administrado por la SRT y contará con los siguientes recursos:

- a) Los previstos en esta ley, incluido el importe de las multas por incumplimiento de las normas sobre daños del trabajo y de las normas de higiene y seguridad;
- b) Una contribución a cargo de los empleadores privados autoasegurados, a fijar por el Poder Ejecutivo nacional, no inferior al aporte equivalente al previsto en el artículo 34.2;
- c) Las cantidades recuperadas por la SRT de los empleadores en situación de insuficiencia patrimonial;
- d) Las rentas producidas por los recursos del Fondo de Garantía de la LRT, y las sumas que lo transfiera la SRT;
- e) Donaciones y legados.

4. Los excedentes del fondo, así como también las donaciones y legados al mismo, tendrán como destino único apoyar las investigaciones, actividades de capacitación, publicaciones y campañas publicitarias que tengan como fin disminuir los impactos desfavorables en la salud de los trabajadores. Estos fondos serán administrados y utilizados en las condiciones que prevea la reglamentación.

CAPÍTULO XI

Fondo de Reserva de la LRT

Art. 34. — Creación y recursos.

1. Créase el Fondo de Reserva de la LRT con cuyos recursos se abonarán o contratarán las prestaciones a cargo de la ART que éstas dejen de abonar como consecuencia de su liquidación.

2. Este fondo será administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y se formará con los recursos previstos en esta ley, y con un aporte a cargo de las ART cuyo monto será anualmente fijado por el Poder Ejecutivo nacional.

CAPÍTULO XII

Entes de regulación y supervisión de la LRT

Art. 35. — Creación.

Créase la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), como entidad autónoma en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. La SRT absorberá las funciones y atribuciones que actualmente desempeña la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Art. 36. — Funciones.

1. La SRT tendrá las funciones que esta ley le asigna y, en especial, las siguientes:

- a) Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resulten de delegaciones de esta ley o de los decretos reglamentarios;
- b) Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART;
- c) Imponer las sanciones previstas en esta ley;
- d) Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus competencias, pudiendo petionar órdenes de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública;
- e) Dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el Fondo de Garantía, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos;
- f) Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán los datos identificatorios del damnificado y su empresa, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas, y además, deberá elaborar los índices de siniestralidad.

2. La Superintendencia de Seguros de la Nación tendrá las funciones que le confieren esta ley, la Ley 20.091, y sus reglamentos.

Art. 37. — Financiamiento.

1. Los gastos de funcionamiento de los entes de supervisión se atenderán con la tasa prevista en la Ley 20.091 (artículo 81), aplicada sobre las cuotas mensuales que el empleador paga a las ART.

2. Facúltase al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes con el fin de pro-

veer a la SRT del equipamiento y presupuesto necesario para el presente ejercicio.

Art. 38. — *Autoridades y régimen del personal.*

1. Un superintendente, designado por el Poder Ejecutivo previo proceso de selección, será la máxima autoridad de la SRT.

2. La remuneración del superintendente y de los funcionarios superiores del organismo serán fijadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

3. Las relaciones del personal con la SRT se regirán por la legislación laboral.

CAPÍTULO XIII

Responsabilidad civil del empleador

Art. 39. — *Responsabilidad civil.*

1. Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del artículo 1.072 del Código Civil.

2. En este caso, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar la reparación de los daños y perjuicios, de acuerdo a las normas del Código Civil.

3. Sin perjuicio de la acción civil del párrafo anterior el damnificado tendrá derecho a las prestaciones de esta ley a cargo de las ART o de los autoasegurados.

4. Si alguna de las contingencias previstas en el artículo 69 de esta ley hubieran sido causadas por un tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar del responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil, de las que se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir de la ART o del empleador autoasegurado.

5. En los supuestos de los apartados anteriores, la ART o el empleador autoasegurado, según corresponda, están obligados a otorgar al damnificado o a sus derechohabientes la totalidad de las prestaciones prescritas en esta ley, pero podrán repetir del responsable del daño causado el valor de las que hubieran abonado, otorgado o contratado.

CAPÍTULO XIV

Órgano tripartito de participación

Art. 40. — *Comité tripartito permanente.*

1. Créase el Comité Consultivo Permanente de la LRT, integrado por cuatro representantes del gobierno, cuatro representantes de la CGT, cuatro representantes de las organizaciones de empleadores, dos de los cuales serán designados por el sector de la pequeña y mediana empresa, y presidido por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

El comité aprobará por consenso su reglamento interno, y podrá proponer modificaciones a la normativa sobre riesgos de trabajo y al régimen de higiene y seguridad en el trabajo.

2. Este comité tendrá funciones consultivas en las siguientes materias:

- a) Reglamentación de esta ley;
- b) Listado de enfermedades profesionales;

- c) Tablas de evaluación de incapacidad laborales;
- d) Determinación del alcance de las prestaciones en especie;
- e) Acciones de prevención de los riesgos del trabajo;
- f) Indicadores determinantes de la solvencia económica financiera de las empresas que pretenden asegurarse;
- g) Definición del cronograma de etapas de las prestaciones dinerarias;
- h) Determinación de las pautas y contenidos del plan de mejoramiento.

3. En las materias indicadas, la autoridad de aplicación deberá consultar al comité con carácter previo a la adopción de las medidas correspondientes.

Los dictámenes del comité en relación con los incisos b), c), d) y f) del punto anterior, tendrán carácter vinculante.

En caso de no alcanzarse unanimidad, la materia en consulta será sometida al arbitraje del presidente de la Nación, quien laudará entre las propuestas elevadas por los sectores representados.

El listado de enfermedades profesionales deberá confeccionarse teniendo en cuenta la causa directa de la enfermedad con las tareas cumplidas por el trabajador y por las condiciones medioambientales de trabajo.

CAPÍTULO XV

Normas generales y complementarias

Art. 41. — *Normas aplicables.*

1. En las materias no reguladas expresamente por esta ley, y en cuanto resulte compatible con la misma, será de aplicación supletoria la ley 20.091.

2. No es aplicable al régimen de esta ley, el artículo 188 de la ley 24.241.

Art. 42. — *Negociación colectiva.*

La negociación colectiva laboral podrá:

- a) Crear Aseguradoras de Riesgos del Trabajo sin fines de lucro, preservando el principio de libre afiliación de los empleadores comprendidos en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo;
- b) Definir medidas de prevención de los riesgos derivados del trabajo y de mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Art. 43. — *Denuncia.*

1. El derecho a recibir las prestaciones de esta ley comienza a partir de la denuncia de los hechos causantes de daños derivados del trabajo.

2. La reglamentación determinará los requisitos de esta denuncia.

Art. 44. — *Prescripción.*

1. Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años a contar de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral.

2. Prescriben a los diez (10) años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las acciones de los entes gestores y de los de la regulación y su-

pervisión de esta ley, para reclamar el pago de sus acreencias.

Art. 45. — *Situaciones especiales.*

Encomiéndase al Poder Ejecutivo de la Nación el dictado de normas complementarias en materia de:

- a) Pluriempleo;
- b) Relaciones laborales de duración determinada y a tiempo parcial;
- c) Sucesión de sueldos; y
- d) Trabajador jubilado o con jubilación postergada.

Esta facultad está restringida al dictado de normas complementarias que hagan a la aplicación y cumplimiento de la presente ley.

Art. 46. — *Competencia judicial.*

1. Las resoluciones de la Comisión Médica Central serán recurribles por ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Los recursos podrán ser interpuestos ante los juzgados federales en lo contencioso administrativo de la Capital Federal y ante los juzgados federales con asiento en las provincias, y deberán ser interpuestos y fundados en el término de 30 días hábiles desde la notificación de la resolución administrativa de la Comisión Médica Central.

Los juzgados federales efectuarán el trámite de acuerdo a lo prescrito por los artículos 49.4 y 49.5 de la ley 24.241 y elevarán las actuaciones a la Cámara Federal de la Seguridad Social dentro del término de 5 días hábiles desde la interposición del recurso.

2. Para la acción derivada del artículo 1.072 del Código Civil en la Capital Federal será competente la justicia civil.

Invítase a las provincias para que determinen la competencia en esta materia según el criterio establecido precedentemente.

3. El cobro de cuotas, recargos e intereses adeudados a las ART así como las multas, contribuciones a cargo de los empleadores privados autoasegurados y aportes de las ART, se harán efectivos por la vía del apremio regulado en los códigos procesales civiles y comerciales de cada jurisdicción, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por la ART o por la SRT.

En la Capital Federal se podrá optar por la justicia nacional con competencia en lo laboral o por los juzgados con competencia en lo civil o comercial.

En las provincias serán los tribunales con competencia en lo civil o comercial.

Art. 47. — *Concurrencia.*

1. Las prestaciones serán abonadas, otorgadas o contratadas a favor del damnificado o sus derechohabientes, según el caso, por la ART a la que se hayan efectuado o debido efectuarse las cotizaciones a la fecha de la primera manifestación invalidante.

Cuando la contingencia se hubiera originado en un proceso desarrollado a través del tiempo y en circunstancias tales que se demostrara que hubo cotización o hubiera debido haber cotización a diferentes ART; la ART obligada al pago según el párrafo anterior podrá repetir de las restantes los costos de las prestaciones abonadas u otorgadas o los pagos efectuados, en la

proporción en la que cada una de ellas sea responsable conforme al tiempo e intensidad de exposición al riesgo.

Las discrepancias que se originen en torno al origen de la contingencia y las que pudieran plantearse en la aplicación de los párrafos anteriores, deberán ser sometidas a la SRT.

2. Cuando la primera manifestación invalidante se produzca en circunstancia en que no exista ni debe existir cotización a una ART las prestaciones serán otorgadas, abonadas, o contratadas por la última ART a la que se hayan efectuado o debido efectuarse las cotizaciones y en su caso serán de aplicación las reglas del apartado anterior.

Art. 48. — *Fondos de garantía y de reserva.*

1. Los fondos de garantía y de reserva se financiarán exclusivamente con los recursos previstos por la presente ley. Dichos recursos son inembargables frente a beneficiarios y terceros.

2. Dichos fondos no formarán parte del presupuesto general de la administración nacional.

Art. 49. — *Disposiciones adicionales y finales.*

Disposiciones adicionales

Primera. Modificación de la ley 20.744.

Sustitúyese el artículo 75 de la ley 20.744 por el siguiente texto:

1. El empleador está obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, y a hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal.
2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la reparación de los daños provocados por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las prestaciones en ellas establecidas.

Segunda. Modificaciones a la ley 24.241.

Sustitúyese el artículo 177 de la ley 24.241 por el siguiente texto:

El seguro del artículo anterior sólo podrá ser celebrado por las entidades aseguradoras que limiten en forma exclusiva su objeto a esta cobertura y a las prestaciones de pago periódico previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Tales entidades podrán operar en otros seguros de personas, que resulten complementarios de las coberturas de seguros de retiro, deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y su razón social deberá contener la expresión "seguros de retiro".

Tercera. Modificaciones a la ley 24.028.

Reemplázase el primer párrafo del artículo 13 de la ley 24.028 por el siguiente:

El trabajador que sufra un daño psicosfísico por el hecho o en ocasión del trabajo durante el tiempo que estuviere a disposición del empleador, deberá —previo el inicio de cualquier acción judicial—

denunciando, a fin de iniciar el procedimiento administrativo obligatorio de conciliación, ante la autoridad administrativa del trabajo. Los jueces no darán traslado de las demandas que no acrediten el cumplimiento de esta obligación.

Quarta: Compañías de seguros.

1. Las aseguradoras que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren operando en la rama de accidentes de trabajo podrán:

- a) Gestionar las prestaciones y demás acciones previstas en la LRT, siendo sujeto, exclusivamente en lo referente a los riesgos del trabajo, de idénticos derechos y obligaciones que las ART, a excepción de la posibilidad de contratar con un beneficiario una renta periódica, de la obligación de tener objeto único y las exigencias de capitales mínimos. En este último caso serán de aplicación las normas que rigen la actividad aseguradora general. Recibirán además igual tratamiento impositivo que las ART.

Los bienes que respalden las reservas derivadas de esta operatoria estarán sujetos al régimen de esta LRT, deberán ser registrados y expresados separadamente de los correspondientes al resto de sus actividades, y no podrán ser afectados al respaldo de otros compromisos.

En caso de liquidación, estos bienes serán transferidos al Fondo de Reserva de la LRT y no podrán ser afectados por créditos o acciones originados en otras operatorias.

- b) Convenir con una ART la transferencia de la totalidad de los siniestros pendientes como consecuencia de su operatoria, a la fecha que determine la Superintendencia de Seguros de la Nación debiendo, en tal caso ceder igualmente los activos que respalden la totalidad de dichos pasivos.

Quinta: Contingencias anteriores.

1. Las contingencias que sean puestas en conocimiento del empleador con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley darán derecho únicamente a las prestaciones de la LRT, aun cuando la contingencia fuera anterior, y siempre que no hubiere prescrito el derecho conforme a las normas de esta ley.

2. — En este supuesto el otorgamiento de las prestaciones estará a cargo de la ART a la que el empleador se encuentre afiliado, a menos que hubiere optado por el régimen de autoseguro o que la relación laboral con el damnificado se hubiere extinguido con anterioridad a la afiliación del empleador a la ART.

Disposiciones finales

Primera. Esta LRT entrará en vigencia una vez que el comité consultivo permanente aprueba por consenso el listado de enfermedades profesionales y la tabla de evaluación de incapacidades.

Tal aprobación deberá producirse dentro de los 180 días desde la promulgación de esta ley.

Hasta tanto el comité consultivo permanente se expida, el Poder Ejecutivo se encuentra facultado por única vez y con carácter provisorio a dictar una lista de enfermedades y la tabla de evaluación de incapacidades.

Segunda

1. El régimen de prestaciones dinerarias previsto en esta ley entrará en vigencia en forma progresiva. Para ello se definirá un cronograma integrado por varias etapas previendo alcanzar el régimen definitivo dentro de los tres años siguientes a partir de la vigencia de esta ley.

2. El paso de una etapa a la siguiente estará condicionado a que la cuota promedio a cargo de los empleadores asegurados permanezca por debajo del 3 % de la nómina salarial. En caso que este supuesto no se verifique se suspenderá transitoriamente la aplicación del cronograma hasta tanto existan evidencias de que el tránsito entre una etapa a otra no implique superar dicha meta de costos.

3. Durante la primera etapa el régimen de prestaciones dinerarias correspondiente a la incapacidad permanente parcial será el siguiente:

Para el caso en que el porcentaje de incapacidad permanente fuera igual o superior al 50 % e inferior al 66 % y mientras dure la situación de provisionalidad, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al porcentaje de incapacidad multiplicado por el 55 % del valor mensual del ingreso base, con más las asignaciones familiares correspondientes. Una vez finalizada la etapa de provisionalidad se abonará una renta periódica cuyo monto será igual al porcentaje de incapacidad multiplicado por el 55 % del valor mensual del ingreso base, con más las asignaciones familiares correspondientes. En ningún caso el valor actual esperado de la renta periódica en esta primera etapa podrá ser superior a 55.000 pesos. Este límite se elevará automáticamente a \$ 110.000, cuando el Comité Consultivo Permanente resuelva el paso de la primera etapa a la siguiente.

En el caso de que el porcentaje de incapacidad sea inferior al 50 % se abonará una indemnización de pago único cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por el coeficiente que resultara de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante.

Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar 55.000 por el porcentaje de incapacidad.

Tercera

1. La LRT no será de aplicación a las acciones judiciales iniciadas con anterioridad a su vigencia salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Las disposiciones adicionales primera y tercera entrarán en vigencia en la fecha de promulgación de la presente ley.

3. A partir de la vigencia de la presente ley, derogan la ley 24.028, sus normas complementarias y re-

glamentarias y toda otra forma que se oponga a la presente.

Art. 50. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO R. PIERRI,
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.) — Señor presidente: nuestra bancada no ha cambiado su opinión respecto del proyecto sobre riesgos del trabajo.

La Presidencia y los legisladores notarán que faltan algunas firmas de integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo. Esto se debe a que el trámite de dicha iniciativa en el seno de la reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia ha sido una vez más totalmente irregular. En el momento en que se discutía este proyecto venido en revisión la reunión carecía de quórum. Cuando verificamos esa circunstancia nos retiramos a nuestros despachos. Luego nos enteramos de que existía la intención de hacer firmar dicho dictamen en los propios despachos de los legisladores.

Inmediatamente hicimos conocer nuestra protesta y presentamos sendas notas a las presidencias de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda recalando lo irregular del procedimiento.

A continuación voy a dar lectura a la nota enviada el 30 de agosto de 1995 al señor presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Osvaldo Borda. Dico así:

"Nos dirigimos a usted, con relación a la reunión de la Comisión de Legislación que preside, que había sido convocada para el día de la fecha en conjunto con las de Presupuesto y Hacienda y Justicia, a fin de tratar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley registrado en el expediente 59-P.E.-94.

"Dicha reunión no se llevó efectivamente a cabo por falta de quórum. Empero, hemos tomado conocimiento que se ha hecho circular por los despachos de los legisladores un proyecto de despacho de comisión para su firma por aquéllos.

"No es la primera vez que se recurre a un procedimiento antirreglamentario para la emisión del dictamen. Sin embargo, en esta oportu-

unidad ello adquiere particular gravedad por la importancia del proyecto a que se refiere.

"Era nuestro propósito manifestar en reunión de comisión nuestra solicitud para que no se trataran las modificaciones y adiciones efectuadas al proyecto de ley sobre riesgos del trabajo a fin de elaborar uno nuevo sobre el tema, en consecuencia con la postura que hemos venido sosteniendo en absoluta discrepancia con la sanción de un proyecto que no sólo desprotege la salud de los trabajadores sino que desnaturaliza la reparación por los infortunios laborales al punto de importar su real desaparición.

"Lamentablemente, se nos ha impedido una vez más exponer nuestra posición y nuestros fundamentos en torno a las cuestiones sometidas a tratamiento a la comisión, razón por la cual le hacemos presente nuestra más enérgica protesta por el irregular mecanismo adoptado para despachar el mencionado proyecto de ley."

Dejo esta constancia de nuestra oposición rotunda a la sanción de este proyecto y a un procedimiento que implicó que no se trate en la Comisión de Legislación del Trabajo. Pretendemos que se presente un nuevo proyecto que sí contemple los derechos de los trabajadores argentinos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: no sé si por la vehemencia del señor diputado o por algunas conversaciones que hay en el recinto, no lo pudo escuchar bien. El episodio que narra el señor diputado se llevó a cabo en una de las tantas reuniones presididas por el hoy desaparecido señor diputado Durañona y Vedia. Lamentablemente ello no permite dejar aclaradas algunas cosas. Pero no es la primera vez que se utiliza este procedimiento, e inclusive en este caso hay firmas de señores diputados radicales aceptándolo.

No puede ser que "tiremos la bronca" y alcemos la voz cuando no estemos de acuerdo con algo y que cuando sí lo estemos el procedimiento sea válido, porque sabe bien el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra que en otras oportunidades se ha hecho esto mismo y él ha estado de acuerdo. En esta oportunidad no lo está y por eso lo plantea.

Valga la aclaración para que todos los señores diputados conozcan la verdad del procedimiento que se ha llevado a cabo. Aunque no estuve presente por razones de enfermedad, sí lo estuvo un diputado que hoy está muerto, pero que no inició ni inauguró este procedi-

niento, y el diputado que acaba de hablar lo sabe perfectamente bien.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: quiero destacar que el procedimiento que se llevó a cabo en la reunión de la comisión tuvo un trámite un tanto irregular, porque hace un tiempo que se da la circunstancia de que se firman los despachos en los pasillos, ante reuniones de comisiones que carecen del quórum adecuado. No obstante ello, algunos señores diputados hemos firmado este dictamen porque consideramos que la Cámara revisora introdujo algunas mejoras al proyecto aunque sin cambiarlo sustancialmente. Recuerdo que habíamos cuestionado esta iniciativa en el mes de junio en esta Cámara.

Afirmamos lo que dijimos en aquella oportunidad; a saber: que este proyecto representa un cambio rotundo en la filosofía de la seguridad social, porque quita al empleador la responsabilidad por los accidentes de trabajo para pasar a un sistema privado donde el Estado se desentien-de, la justicia queda en manos de la economía de mercado y el accidentado corre el riesgo de caer presa de este sistema de mercantilización que terminará con los derechos y con muchas conquistas de los trabajadores argentinos.

Seguimos cuestionando la constitucionalidad de este proyecto de ley, tal como lo hicimos en aquella oportunidad, porque el Estado hace abandono de una responsabilidad que tiene ante la seguridad social de los trabajadores y que surge del artículo 14 bis de la Constitución. Además, existe falta de igualdad ante la ley —contemplada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna— ya que se establece un sistema diferencial entre las personas que sufren un accidente en un determinado lugar y están en relación de dependencia y aquellas que sufren el mismo accidente en el mismo lugar pero que no trabajan en relación de dependencia. Esto es algo que también señalamos cuando se discutió el proyecto.

Este es un sistema engorroso que complica la clarificación y la discusión del conflicto. Hemos hecho muchas sugerencias y observaciones, porque a pesar de no estar de acuerdo con la filosofía del proyecto entendíamos que era importante modificar algunos de sus aspectos y no dejarlos peligrosamente librados a lo que se establezca en un decreto reglamentario.

Se nos ocurre positiva la iniciativa del Senado de poner un término a los contratos que se celebrarán entre el empleador y las aseguradoras de riesgo del trabajo. Este es un aspecto que apa-

recía difuso y perdido en el tiempo. De esa forma nunca se podrían llegar a mejorar las condiciones de trabajo atendiendo a criterios tales como la seguridad y la higiene.

Considerábamos que muchos aspectos quedaban librados a la buena voluntad de las empresas que se autoaseguraban y que era necesario legislar con mayor profundidad porque las empresas que se decidieran por un autoseguro iban a tener a su vez la responsabilidad de la policía del trabajo y de controlar la seguridad e higiene de sus establecimientos. Esto es realmente algo insólito, ya que no se puede ser juez y parte. Sabemos que estas empresas no se autocontrolarían.

Quiero referirme especialmente a este punto y, si me permiten, leeré textualmente lo que dije sobre el particular en un discurso que pronunciara en el pasado mes de junio. Señalé: "Las Aseguradores de Riesgos del Trabajo tienen un rol de policía para mantener la seguridad e higiene en el trabajo, pero ¿quién va a ejercer que estas compañías autoaseguradas ejerzan el poder de policía y controlen los niveles de seguridad e higiene en las empresas?"

El Senado me dio la razón al establecer que esta cuestión es responsabilidad de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Hay otro tema sobre el cual se legisla y mediante el que se trata de dar mayor injerencia a la justicia provincial. Cuando se llega a la instancia de la Justicia federal, en las provincias se trata de descentralizar y llegar lo más cerca posible de la persona afectada.

Estamos de acuerdo con la modificación, pero quiero dejar constancia de que es insuficiente la solución porque en los tribunales habrá problemas prácticos. Ya señalamos en otra oportunidad que los tribunales federales no están dotados de los elementos necesarios: no tienen peritos y no cuentan con personas idóneas ni con elementos suficientes para cumplir con el rol que se les asigna.

Aceptamos las modificaciones porque consideramos que se ha mejorado. Si nos quedáramos con el proyecto aprobado por esta Cámara estaríamos aceptando una norma sumamente regresiva. Con estas modificaciones avanzamos, pero son sólo el inicio de un debate que habrá que continuar, porque van a aparecer otras dificultades que tendrán que ser salvadas sobre la marcha.

Considero que hay muchas improvisaciones en este nuevo sistema y tenemos que legislar para mejorar tales condiciones, a pesar de que no estemos de acuerdo con su filosofía. Dentro del criterio adoptado por la mayoría también habrá

dificultades, porque realmente no están "acci-
tados" los mecanismos para que esto pueda po-
nerse en práctica.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: el Frepaso va
a rechazar estas modificaciones y a efectuar una
moción sobre este tema.

Más allá de las dificultades o de los incon-
venientes que haya tenido el procedimiento se-
guido con este dictamen, debemos convenir que
la sanción del Senado aplica una suave y leví-
sima cosmética a un proyecto de ley que es cla-
ramente atentatorio de conquistas que durante
muchos años produjeron la dignificación de los
trabajadores argentinos.

No es un tema menor la cuestión vinculada
con los accidentes de trabajo. En el país se re-
quieren normas que sean justas para evitar un
sistema manchesteriano que regía hace décadas,
donde la parte más débil de la relación laboral
—obviamente el trabajador pero fundamental-
mente sus familiares— quedaba desguarnecida
para el caso de una incapacidad derivada de un
accidente o, en la más grave de las circunstan-
cias, cuando quien era el sustento de una fa-
milia fallecía como consecuencia de un infortu-
nio producido en el transcurso de la relación
laboral.

Entonces, cuando digo que la cuestión de los
accidentes de trabajo no es un tema menor, me
estoy refiriendo a una ley que definió durante
muchos años un sistema, en un país en el que,
más allá de los avatares, prevalecía en la con-
ciencia general que una legislación laboral ade-
cuada siempre debe poner énfasis en la parte
más débil, es decir, en el trabajador. El peroni-
smo hizo mucho en este sentido durante mucho
tiempo y supongo que sobre estas cosas opina-
ban los miles de personas que días atrás mani-
festaron, entre otras cosas, para que no se si-
guiera profundizando en una legislación clara-
mente atentatoria y degradante de los intereses
de los trabajadores argentinos.

Pienso que seguramente han reflexionado so-
bre este tema muchos de los dirigentes gremiales
que estuvieron en la Plaza del Congreso acom-
pañando la convocatoria de la Confederación Ge-
neral del Trabajo, y que son algunos de los fir-
mantes de este dictamen.

Podemos citar un ejemplo que conmocionó a
la opinión pública hace días. Si el desgraciado
accidente que costó la vida a una azafata hu-
biese sucedido estando vigente este proyecto que
se pretende que aprobemos, el hijo de esa aza-
fata o sus familiares, según lo que plantea el

texto en debate, sólo podrían cobrar como má-
ximo la suma de 55 mil pesos.

Sería interesante preguntar a cualquiera de
los diputados que van a votar estas reformas, o
a cualesquiera de los que estuvieron en la plaza
acompañando la manifestación que hicieron los
trabajadores organizados reclamando por la de-
saparición de aquellas disposiciones que los per-
judican, qué pensarían si un familiar suyo se hu-
biese caído de un avión, por culpa de una em-
presa, y el máximo de indemnización fuera de
55.000 pesos.

Estas barbaridades que se están dando en la
República Argentina nos hacen pensar en el hi-
pótético caso de que se caiga no ya un emplea-
do, sino un pasajero, supuesto en el cual sus
familiares estarían en condiciones de reclamar la
suma que se les ocurriese, pero los del traba-
jador únicamente podrían reclamar 55.000 pesos.

Entonces conviene detenerse a plantear que
esta Cámara de Diputados tiene la oportunidad
de subsanar un desatino, que fue aquel que pro-
dujo cuando votó esta norma, que se redactó
para perjudicar a los trabajadores, que nada tie-
ne que ver con las normas de seguridad e higiene
del trabajo. Lo cierto es que las reformas del
Senado aplican una cosmética hipócrita, cuando
se dice que se van a fijar las normas que tiene
que haber en esta materia. En un rapto de jus-
ticia social, algunos senadores, acordándose de
lo que señalara en otras épocas quien fundó el
partido al que se enorgullecen de pertenecer,
los bloques mayoritarios de ambas Cámaras, es-
tablecieron un plazo de dos años para el cum-
plimiento de determinadas normas que se van a
plantar en materia de higiene y seguridad del
trabajo. Esto es poco serio.

Insisto en que la Cámara de Diputados tiene
ahora la oportunidad de frenar la sanción de
esta norma, que está redactada para bajar erró-
neamente costos merced a la parte más débil de
la relación laboral, es decir, del trabajador, y
que si se sanciona conllevará la aplicación de
un principio irritante y una flagrante inconsti-
tucionalidad por la desigualdad de los ciudada-
nos ante la ley.

Por eso, más allá de la oposición que en su
momento planteamos, formulo moción de orden
para que el tema vuelva a comisión, solicitando
además que la votación se haga en forma no-
minal. Realizo este pedido apelando a aquellos
diputados justicialistas que creen en la justicia
social, que creen que la legislación del trabajo
es el resultado de décadas de elaboración y lu-
cha en la República Argentina, y que saben muy
bien que durante mucho tiempo nos enorgulleci-
mos diciendo a otros países que contábamos con

una legislación laboral con una clara raíz humanística, protectora de los derechos del trabajador, aunque ahora nos estamos quedando un tanto rezagados toda vez que Chile, por ejemplo, que en una época estuvo detrás de nosotros en esta materia, hoy cuenta con una legislación mucho más protectora de los trabajadores que la que tendremos nosotros si llegamos a sancionar este verdadero disparate.

Sobre la base de la invocación de estos principios, que los sé caros a la historia personal de la gran mayoría o de todos los diputados de la bancada Justicialista, formulo moción de orden para que este proyecto vuelva a comisión. Solicito que la votación se efectúe en forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

— Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Pierri). — Como en este momento no hay número, se va a llamar para votar.

— Se llama para votar.

— Luego de algunos instantes:

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar en forma nominal la moción de que el proyecto de ley vuelva a comisión.

— Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 155 señores diputados presentes, han votado 68 señores diputados por la afirmativa y 79 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se han registrado los votos de 5 señores diputados por no haber hecho uso de sus respectivas llaves.

— Votan por la afirmativa los señores diputados: Alberti, Algaba, Alvarez (C. A.), Balter, Becerra (C. A.), Bischof, Bonomi, Bravo, Bruzzo, Cabirón, Careca, Castillo (O. A.), Coballos, Closs, D'Elia, Del Fábri, Di Tulio, Fabbrissin, Falletti, Felgueras, Fernández Meijide, Flores, Fragosó, Galante, Gallo, Calván, González Gaviola, Hardy, Hernández, Jaunarena, Juncosa, Kelly, Koth, López (A. H.), Losada, Maidana, Marcos, Martínez (M. L.), Mathov, Mendoza (M.), Mercader, Molinas, Montiel, Noya, Novau, Olivera, Orgáz, Orquín, Ortiz Maldonado, Parola, Pascual, Pellín, Peralta, Pernacetti, Piccinini, Polo, Prat, Solanas, Spinoza, Storani, Teodosiu, Terragno, Trettel Meyer, Usandizaga, Vázquez (S. B.), Vicchi, Viglione, Zuccardi de Flamarique.

— Votan por la negativa los señores diputados: Abasto, Albamonte, Alcalá, Alsogaray, Alvarez Echagüe, Aranda, Argüello, Ayala, Ayetz, Balestrini (A. F.), Barrionuevo, Baum, Benzi, Bermudez, Bianchi Silvestre, Borda, Braechi, Bullrich, Cámara, Camaño, Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Castro, Crestelli D'Alessandro, Daud, Dellepiane, Díaz Martínez, Drisaldi, Fernández Gill, Fines, García Moreno, Gazia, Giménez (O. A.), Giménez (R. F.), Goja, Golpe (C. H.), González Cabañas, Granados, Green, Guerrero, Herrera, Humada, Ibarbia, Lahoz, Lambert, Leguizamón, López (J. A.), Luna, Macedo, Martínez (E.), Matzkin, Menem, Miralles de Romero, Morello, Müller, Muniagurria, Nacul, Niño, Parada, Pope, Pérez, Perrini, Pichetto, Ré, Rodríguez (M. F.), Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Salino Sampietro, Soria, Sucaria, Sueiro, Tona, Toto, Valcareel, Venesia, Zicarelli.

— Se abstienen de votar los señores diputados: Arias y Digón.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda rechazada la moción.

Se va a votar si se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que lo fuera pasado en revisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

14

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sra. Fernández Meijide. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: en el día de ayer, en ocasión de apoyar la candidatura a senador del señor diputado Antonio Erman González por el Partido Justicialista, el señor diputado por la Unión del Centro Democrático, ingeniero Alvaro Alsogaray, se refirió a mi persona con términos que en el Frepaso consideramos injuriosos.

Menciono al Frepaso porque no planteo esta cuestión de privilegio a título personal sino en mi carácter de diputada nacional en representación de esa fuerza política. Creo que, de no

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 4135.)